

opinión

La macroeconomía argentina viene acumulando desequilibrios en todos los frentes, que ganan en intensidad al ser desatendidos. Entre los más graves, se puede contar el aumento de la pobreza frente a la creciente inflación en proceso de espiralización ascendente, la escasez de divisas y las restricciones cambiarias, o las dificultades para llevar adelante los procesos productivos de bienes y servicios básicos.

Todos los desafíos económicos estuvieron a la vista durante los últimos meses y así permanecen, haciendo cada vez más punzante la pregunta de si Argentina puede darse el lujo de un calendario electoral de varios meses en los cuales se ponen virtualmente en pausa decisiones clave de política económica.

El frente más visible de los indicadores que dejan a nuestro país en los peores rankings económicos es el del valor del dólar y la inflación. Para peor, el valor de la divisa fue elegido como ancla para contener el crecimiento de los precios. Las dos variables funcionan como termómetro de la incertidumbre económica y la falta de confianza acerca de la futura conducción política. También es cierto que, en función de la candidatura del principal decisor de política económica, se han ido acumulando impulsos adicionales, como la devaluación post-Paso y el plan de compensación de ingresos, llamado "Plan Platita", junto a mecanismos generadores de presiones inflacionarias futuras como el congelamiento de tarifas y los propios programas de precios máximos. Un precio "topeado" ayer sin estabilización del resto es la garantía de un salto mañana, cuando se saque la tapa de la olla a presión.

Para atacar de raíz estos problemas, hay cierta coincidencia en combatir su causa madre, que es el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo. La situación de las cuentas públicas en nuestro país es un tema económico de debate generalizado. Conocido es por todos que el sector público es deficitario: gasta más de lo que recauda.

Pero a medida que nos adentramos en los detalles, más opaco es hacia la sociedad el conocimiento de los mecanismos detrás de la generación de ingresos y hacia dónde van los gastos públicos. Esto es así por una combinación de decisiones propias de transparencia del sector público, junto con el propio desinterés que genera el tema en el público en general. En este punto medran las propuestas políticas de los distintos frentes.

Por un lado, quienes proponen un Estado grande que, además de ocuparse de las cuestiones básicas como seguridad, justicia, educación y salud, también le pague a parte de la población la luz, el gas, los pasajes de transporte, y lo asista en sus decisiones de ahorro financiero y jubilatorio. En estas propuestas suele soslayarse el hecho de que, como no se tienen los recursos para afrontar tamaño dispendio, se debe recurrir al endeudamiento y a la emisión de moneda que tomará más caros la luz, el gas y el costo de transporte, así como se

LA ECONOMÍA

Los desequilibrios del próximo presidente



Ariel Barraud

Director IIE-Bolsa de Comercio de Córdoba. Profesor FCE-UNC

comerá parte de los ingresos y de los ahorros de la población.

Por la otra vereda, propuestas de fuertes recortes del gasto estatal, que pueden ser comunicacionalmente simples de transmitir a la población

sin conocimientos específicos o sin interés, pero de dudosa implementación fáctica.

De cuánto es el déficit

En el ámbito nacional, que es el

nivel de gobierno que nos ocupa en las elecciones presidenciales, un elemento que colabora en el debate es recordar la composición del gasto del que se está hablando. Un 45% del gasto actualmente se destina a jubilados, pensionados y asignaciones familiares y por hijo. Otro 10% son los planes de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El gasto en empleados públicos es del 13%. Un 12% se destina a subsidios a la energía y el transporte. Un 10% va a obra pública. Las transferencias a provincias, universidades, empresas públicas y otros gastos son el 10% restante. Como puede apreciarse, el gasto está bastante concentrado en las prestaciones sociales.

Para ponerle valores en pesos al debate, un ejercicio útil es el siguiente. Tomar los datos de enero a septiembre de este año y compararlo con la última vez que el Estado nacional fue superavitario en el acumulado de dichos meses del año, que fue el año 2019. Ese año también fue un año electoral, de manera que la

comparación es pertinente. Expresando todos los datos a moneda actual, actualmente acumulamos \$ 3,8 billones de déficit primario (unos US\$ 10 mil millones expresados al tipo de cambio oficial). Al tercer trimestre de 2019, el ahorro primario del sector público nacional era apenas superavitario, casi equilibrado.

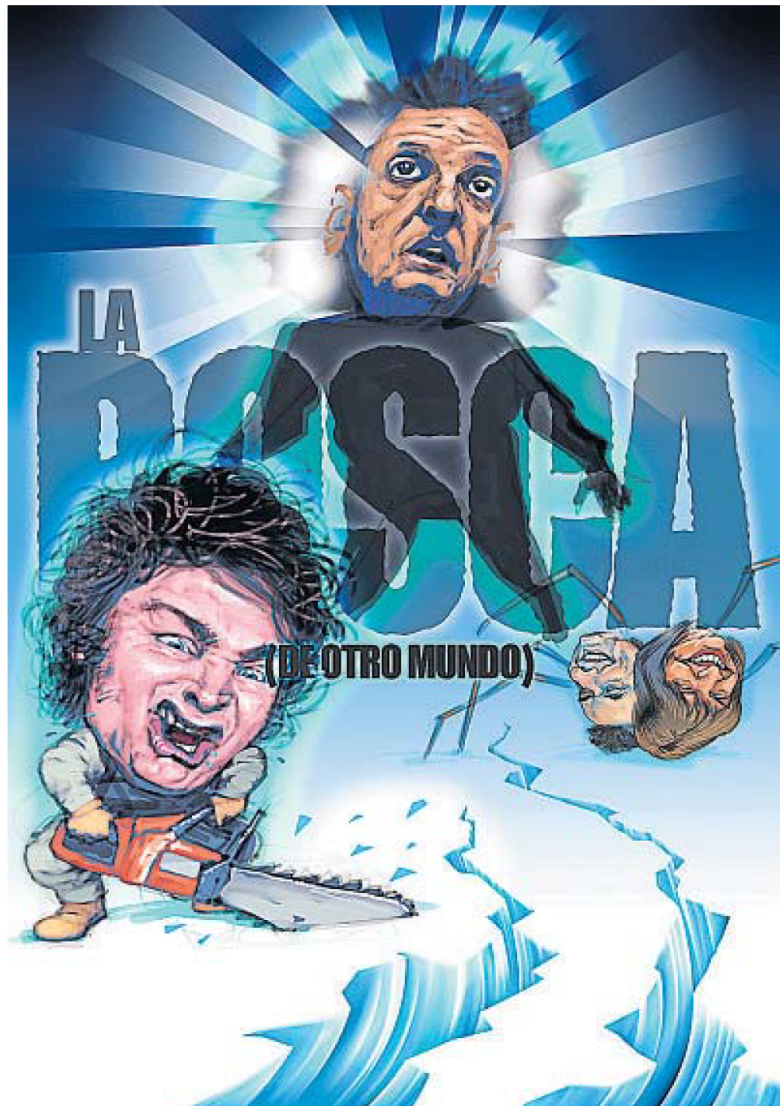
Teniendo en cuenta que los ingresos tributarios en ambos períodos fueron prácticamente iguales, claramente la diferencia viene por el lado del gasto: en lo que va de 2023, el gasto superó en \$ 3,1 billones (un billón es un millón de millones) al gasto registrado en igual lapso de 2019. Pero esto no ocurrió en todas las líneas. Muy por el contrario, hubo rubros del gasto que este año evidenciaron fuertes ajustes. Las jubilaciones resultaron \$ 1,8 billones inferiores a las que se pagaban regularmente en 2019, bajo la ley de movilidad vigente en aquella época. Las familias recibieron por asignaciones \$ 450 mil millones menos que lo que se pagaba hace cuatro años. Como contrapartida, el rubro que registra los Programas y Planes sociales sumó \$ 2,5 billones más que lo destinado a estos rubros clientelares en 2019. Más aún, estos planes pasaron de representar menos de un 5% del gasto social en 2019 a casi un 20% de dicho gasto en lo que va de este año.

Otro rubro clave son los subsidios a la energía. En 2019 se habían reducido para acercar los costos de la electricidad y el gas a su verdadero valor; pero en 2023 se volvió a ampliar dicha brecha. Esto explica por qué se gastaron \$ 1,2 billones más en este rubro en la comparación entre los dos períodos.

En lo que hace al gasto de obra pública, el acumulado de 2023 resulta casi \$ 1 billón superior al de igual período de 2019. La mitad de este mayor gasto de capital corresponde a la inversión registrada en el rubro Energía (el Gasoducto).

La comparación con un período en el que el nivel nacional de gobierno en nuestro país logró alcanzar niveles positivos de ahorro proporcional sólo un ejemplo, un primer mojón de hacia dónde se pueden dirigir los esfuerzos fiscales; ya que muestran que en algún momento la economía se movió con otros niveles de gasto. Así el principal gasto, que es la Seguridad Social, podría oportunamente recuperar los niveles de poder adquisitivo sin perjudicar el resultado fiscal en la medida que se controlen rubros como los opacos planes sociales, y los subsidios destinados a empresas para divorciar las tarifas del costo real de los servicios. La reversión de estos aumentos (nótese que no se plantea su eliminación) permitiría un ahorro que casi coincide con el déficit actual.

No se trata de agobiar al lector con cifras que ciertamente son abrumadoras, sino de ponerle números al debate acerca de la necesidad del control de erogaciones para lograr una mejora fiscal. Estos números pueden ayudar a discernir cuánto empeorará el déficit un "Plan Platita" de \$ 3 billones, o si es cierto que el problema sólo tiene solución a través de una drástica poda del gasto.



ILUSTRACION DE ERIC ZAMPERI